



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	432
Radicado	05266-31-03-001-2016-00377-00
Procedimiento	Servidumbre Eléctrica
Demandante (s)	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandado (s)	Herederos de Roberto Cardona y otros
Asunto	Declara falta de competencia, por el factor subjetivo, para seguir conociendo del proceso

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO

Veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno

Se evidencia que se carece de competencia, por el factor subjetivo, para seguir conociendo del proceso de la referencia, para lo cual sirvan estas

CONSIDERACIONES:

1. La demanda fue admitida y tramitada, con fundamento en que se estimó, en su momento, que la competencia, en este tipo de procesos, se establecía, de manera privativa, en el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes objeto de la pretensión impositiva de servidumbre, según el artículo 28, numeral 7°, del Código General del Proceso y, en que si bien el numeral 10° de ese mismo estatuto previene que *«[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad»*, se trataba de fueros concurrentes, prevaleciendo –según lo ha había determinado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia-, la norma especial relativa al fuero real dentro del factor territorial, por ser privativa, es decir, excluyente de otros fueros.

2. Sin embargo, la misma Sala, en providencia AC140-2020 del 24 de enero, cambió su criterio y se inclinó por la aplicación del inciso primero del citado

canon 29, según el cual «es *prevalente* la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», por lo que en todos los trámites en donde participe un organismo de linaje «público» habrá de preferirse su «fuero personal».

Esto fue lo que expresó:

«Como se anotó anteriormente, en las controversias donde concurren los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad pública pretende imponer una servidumbre de conducción de energía eléctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: ¿Cuál de las dos reglas de distribución es *prevalente*?¹

Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consignó una regla especial en el canon 29 *ibidem*, el cual preceptúa que “[e]s *prevalente* la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes... Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor”.

En virtud de las pautas interpretativas previstas en los artículos 27 y 28 del Código Civil, que aluden en su orden a que, “[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, y “[l]as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”; *es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.*

¹ Conocer en forma *prevalente* un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las demás, debe primar en su elección.

La justificación procesal de esa prelación muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, *ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional* (Art. 16).

En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, *esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial*.

Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este último, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuración normativa, no excluyó en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a más que ello desconoce cómo el factor subjetivo está presente en distintas disposiciones procesales, según se dejó clarificado en el anterior acápite».

3. Esta última posición ha sido ratificada por la misma Sala Civil en pleno, como da cuenta el auto AC1685-2021, del 5 de mayo de ese año, “independientemente de que el escrito inicial se haya radicado ante los jueces del lugar donde se encuentra el bien objeto de la servidumbre, por cuanto, en atención al precedente anotado, *dado que se trata de una competencia por el factor subjetivo, esta circunstancia no sirve para prorrogarla*” y que no se puede invocar que la entidad pública renunció al fuero subjetivo:

«...en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual *no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto.*

En tal sentido, no puede afirmarse que si un órgano, institución o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, está renunciando automáticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ahí que, no puede renunciar a ella”.

4. En el presente caso, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, conforme al Acuerdo 69 de 1997 del Concejo de Medellín, con domicilio principal en esa misma ciudad, por lo que no es competente este juzgado para seguir conociendo de este proceso, debiéndose declarar la falta de competencia, advirtiéndose que lo actuado hasta este momento conserva validez, según lo determina el inciso primero del art. 138 *ídem*.

DECISIÓN:

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Declarar la falta de competencia, por el factor subjetivo, para seguir conociendo del proceso citado en la referencia, advirtiéndole que lo actuado hasta este momento conserva validez, según lo determina el inciso primero del art. 138 del C. G. del P.
2. Ordenar el envío del expediente físico a la Oficina Judicial de Medellín, para que se repartido entre los juzgados civiles del circuito de oralidad de dicha ciudad, pues no hay actuación digital, salvo esta providencia.

NOTIFÍQUESE


GERMÁN ALONSO FLORES HINCAPIÉ
JUEZ

45

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado
No. 117, fijado hoy en la Secretaría del
Juzgado a las 8 am

Envigado, septiembre 24 del 2021



Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria